

deslizamientos de tierra e inundaciones en barrios urbanos pobres. Asimismo, el Banco ha financiado inversiones para salvaguardar diversos bienes sociales y económicos, como hospitales, escuelas, servicios públicos, infraestructura básica, asentamientos humanos y recursos naturales (véase el recuadro 7).

Recuadro 6

Obras de mitigación: el caso de la represa Sabaneta en la República Dominicana

La represa Sabaneta, construida por el gobierno dominicano en los años ochenta con el fin de regular el caudal del río San Juan, presentaba un gran peligro, ya que las estructuras de desagüe sin completar aumentaban considerablemente el riesgo de ruptura en caso de fuertes lluvias.

A petición del gobierno dominicano, en 1993 el BID aprobó el financiamiento de un proyecto de inversión de US\$48 millones que abarcaba obras de reacondicionamiento preventivo del dique y otras estructuras fundamentales de la represa. Las reparaciones, cuyo costo ascendió a US\$10,7 millones, concluyeron durante el primer semestre de 1998, justo antes del huracán Georges, que fue de categoría III. Entre las áreas más afectadas por las lluvias del huracán se encontraba precisamente la provincia de San Juan de la Maguana, donde está situada la represa Sabaneta. El río San Juan recibió 320 mm de lluvias y se calcula que en la represa cayeron directamente alrededor de 255 mm. No obstante, la represa, los canales de desagüe, la central hidroeléctrica y la cuenca de amortiguación funcionaron normalmente y no sufrieron mayores daños, lo cual llevó a un panel de expertos a la conclusión de que las obras recién concluidas habían sido muy eficaces.

Las ventajas del funcionamiento normal de la represa durante el huracán fueron muy grandes. En la cuenca del río San Juan viven 174.900 personas, en su mayoría río abajo de la represa Sabaneta. El valle del río San Juan ocupa el segundo lugar entre las regiones agrícolas más productivas del país, con más del 10% del total de las tierras cultivables del país. Una ruptura de la represa habría ocasionado pérdidas enormes de vidas humanas y producción agrícola, así como grandes pérdidas indirectas causadas por la perturbación de la producción y los aumentos conexos de las tasas de desempleo y pobreza.

Recuadro 7

Prácticas adecuadas de mitigación de desastres: protección de las laderas del volcán Pichincha en Ecuador

El objetivo de este préstamo de US\$20 millones aprobado en 1996 es mitigar el riesgo de desastres en las laderas del volcán Pichincha

Las obras de regulación del agua resultaron eficaces para evitar los daños causados por inundaciones y aludes de lodo durante la última temporada de lluvias. La nueva red hidrometeorológica está proporcionando información útil para un futuro sistema de alerta anticipada. La participación comunitaria ha sido un elemento fundamental. Se formaron microempresas locales y se les proporcionó apoyo a fin de ofrecer servicios de recolección de desechos sólidos. Con talleres y campañas de educación del público se ha logrado una mayor comprensión y conciencia del riesgo al vivir en un área frágil. Organizaciones no gubernamentales y el Programa Hábitat de las Naciones Unidas propusieron mejoras en la política urbana y la organización del gobierno municipal. Debido a la actividad volcánica del volcán Pichincha en 1999 se intensificó la necesidad de una campaña de concientización de mayor alcance. Con la coordinación del alcalde de Quito se organizó un sistema de alerta amarilla y roja a fin de preparar a la población para una gran erupción volcánica.

Las medidas de mitigación no estructurales, como normas de ordenamiento territorial y códigos de construcción, capacitación profesional y campañas de concientización de vecindarios, también son instrumentos para reducir el impacto de los desastres. En un programa de reconstrucción apoyado por el Banco después del terremoto que sacudió la región cafetalera de Colombia en 1999, requería que solamente aquellas obras de rehabilitación y reparaciones realizadas de conformidad con códigos resistentes a los terremotos podían recibir subsidios.

Además de las inversiones directas, el Banco proporciona asistencia técnica para evaluar la factibilidad de proyectos de mitigación que podrían recibir financiamiento. El Banco financia un Fondo de Prevención y Mitigación para América Central, administrado por el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América

Central (CEPREDENAC), que ofrece asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas de los seis países de América Central para medidas de evaluación y reducción de riesgos, así como fortalecimiento institucional.

Alerta temprana y preparativos para situaciones de emergencia

Con apoyo del Banco, varios países están mejorando sus sistemas de alerta temprana y preparativos para situaciones de emergencia (el grado de preparación para responder de forma rápida y eficaz para salvar vidas, reducir el sufrimiento y facilitar la recuperación de vecindarios después de los desastres). El Banco financia programas de capacitación de pobladores locales en materia de preparativos en Belice y sistemas nacionales de alerta temprana y medios de respuesta en Ecuador y Argentina. En Belice, con financiamiento del Banco, se facilitará la preparación de planes de evacuación, el reacondicionamiento de escuelas para que sirvan de refugios locales y la construcción de refugios regionales. En Brasil, con financiamiento del Banco se reforzarán las actividades de la Comisión de Coordinación para Meteorología, Climatología e Hidrología y se crearán centros meteorológicos regionales a nivel estatal. La mejora de la comprensión y la comunicación entre los científicos, que evalúan las condiciones atmosféricas e hidrológicas y los encargados de dar la alerta temprana y movilizar la respuesta en casos de desastre, es fundamental para reducir su impacto

Reformas institucionales

La reducción de riesgos figura actualmente en diversos programas gubernamentales de la región, en muchos casos por primera vez. Los países están reconociendo que para permitir que las instituciones gubernamentales cumplan los objetivos de reducción de riesgos para el desarrollo —y no simplemente para responder en forma adecuada cuando ocurren los desastres naturales— deben adoptar nuevos mecanismos institucionales. Los organismos de planificación y desarrollo deben asumir un papel más explícito y, además, es preciso introducir mecanismos de coordinación que permitan reunir a esos organismos nacionales con los gobiernos locales y la sociedad civil en una estrategia común.

El Banco está asignando un renovado énfasis al respaldo de los países de la región en esa transición a nuevos arreglos institucionales, políticas, presupuestos y programas específicos que generen la capacidad técnica permanente y operativa que se requiere para asegurar inversiones sostenidas en materia de prevención de desastres. En Centroamérica, el Banco está respaldando un programa regional que ayuda a los nuevos sistemas nacionales a formular planes de acción sobre políticas de prevención y desarrollo institucional. El BID también proporciona recursos destinados a mejorar la diseminación de datos técnicos e información sobre buenas prácticas. En Ecuador, Argentina y Colombia, por ejemplo, el reforzamiento institucional está ayudando a crear y fortalecer sistemas interinstitucionales eficaces de reducción de riesgos.

El Banco ha ayudado a los países a adoptar una perspectiva a más largo plazo, ya que tradicionalmente ha sido el caso de responder sólo a los desastres una vez que ocurran (véase el recuadro 8). El financiamiento del Banco para acciones de mitigación (que pueden ser los componentes de inversión de un proyecto de reconstrucción) constituye un importante instrumento para promover reformas institucionales destinadas a transformar estos incipientes sistemas nacionales en proveedores más eficientes de servicios de prevención y de

Recuadro 8

Creación de sistemas interinstitucionales de prevención y respuesta

El programa de prevención y rehabilitación tras el Huracán Mitch de 1999 en Belice contempla el otorgamiento al gobierno de US\$21 millones en asistencia técnica para formular un sistema global de gestión de riesgos, que transforma a la organización nacional de gestión de emergencias (National Emergency Management Organization - NEMO) en la institución matriz encargada de todos los aspectos de la gestión de riesgos. Con el financiamiento del Banco, la NEMO realizará estudios sobre riesgos y formulará un plan integral para orientar sus actividades futuras. El BID financiará la modernización de la organización, incluidos su mandato, sus recursos humanos y sus procedimientos operativos, así como las instalaciones y los equipos existentes. El proyecto también fortalecerá la capacidad local de respuesta mediante el financiamiento de la concientización comunitaria y actividades de capacitación.

preparación para emergencias. En efecto, el impulso generado por varias actividades de mitigación y preparación, que inevitablemente surge en las situaciones posteriores a un desastre natural se perderá si los países no comienzan a organizar sistemas nacionales eficaces de gestión de riesgos para respaldar y dar continuidad a los esfuerzos.

Respuesta inmediata

Mobilización rápida de recursos

La principal misión del Banco es la provisión de préstamos para el desarrollo, mientras que la respuesta de emergencia y el alivio de los desastres corresponde principalmente al dominio de las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria. No obstante, el representante del Banco en el país afectado puede poner inmediatamente a disposición hasta US\$ 50.000 en recursos no reembolsables, que por lo general se transfieren directamente al organismo nacional de emergencia. Más importante aún, el Banco está presente durante la emergencia, participando en el análisis inicial de los daños y necesidades, con el fin de proveer asistencia técnica para identificar las estrategias de recuperación a mediano y largo plazo en diferentes sectores y para comenzar a preparar los programas de préstamos en respaldo de la reconstrucción.

En el término de unos pocos días, después de un desastre, el representante del Banco en el país puede identificar recursos de proyectos que se encuentran en ejecución y que pueden reorientarse a la satisfacción de las necesidades inmediatas de emergencia (como el restablecimiento de servicios o la rehabilitación inicial de la infraestructura), así como las necesidades de reconstrucción a más largo plazo. Si se lo solicita, estos recursos también pueden financiar actividades de asistencia humanitaria (por ejemplo, medicamentos o albergues). Tres días después de los recientes deslizamientos y flujos de desechos que se produjeron en Venezuela en diciembre de 1999, el Banco pudo reasignar a la emergencia US\$ 200 millones provenientes de operaciones existentes, permitiendo al gobierno y al Banco realizar posteriormente los arreglos necesarios y la forma en que tales préstamos podrían reprogramarse.

El Mecanismo de Reconstrucción para Emergencia

En diciembre de 1998, el Banco creó el Mecanismo de Reconstrucción para Emergencia (MRE), que permite al Banco responder rápidamente después de un desastre natural. El primer país que utilizó dicho servicio fue Colombia, después del terremoto que afectó a la región cafetalera (véase el recuadro 9).

Recuadro 9

Colombia utilizó el MRE para la respuesta de emergencia en el terremoto de 1999

El BID utilizó por primera vez el MRE en ocasión del terremoto que devastó la región productora de café de Colombia en enero de 1999. El 16 de febrero, menos de 20 días después de la catástrofe, el BID aprobó un préstamo por US\$20 millones para contribuir a restablecer los servicios básicos. De acuerdo con las normas flexibles del MRE, este préstamo de emergencia tuvo un período corto de desembolso (de un año), un período de gracia de cinco años, un fondo rotatorio del 20 por ciento del monto total y procedimientos simplificados de adquisiciones.

Este préstamo proporcionó recursos inmediatos para iniciar el proceso de rehabilitación, que incluyó estudios de evaluación de los daños y planes de reconstrucción, la eliminación de escombros y la demolición de edificios, la inspección y la estabilización de puentes, la construcción de albergues temporales y la reparación de la infraestructura de servicios: agua potable, saneamiento, salud y educación. Dicho proyecto sentó las bases para un préstamo mayor de reconstrucción por US\$135 millones que se aprobó a fines de 1999.

El MRE tiene por objeto poner muy rápidamente a disposición los recursos necesarios para financiar un menú preestablecido de actividades elegibles, que incluyen ayuda para acelerar el restablecimiento de los servicios, el financiamiento de reparaciones temporarias y los trabajos de limpieza en el período inmediatamente posterior a un desastre natural. La solicitud del país sobre el uso de esos recursos pone en movimiento un procedimiento acelerado de aprobación de préstamos en la sede del Banco, que puede durar de dos a cuatro sema-

nas. El MRE que esta dotado con US\$ 100 millones puede otorgar en préstamos hasta US\$ 20 millones en recursos del capital ordinario ó US\$ 10 millones en recursos del Fondo para Operaciones Especiales (recursos altamente concesionales).

Estabilización de emergencia: considerando los impactos macroeconómicos y sociales

Después de un desastre de gran magnitud, los países pueden enfrentar diversos impactos macroeconómicos, entre ellos la disminución de las exportaciones y el incremento de las importaciones, desaceleración del crecimiento económico, reducción del ingreso per cápita, disminución de los ingresos tributarios que puede prolongar los desequilibrios fiscales y un repentino aumento del nivel de endeudamiento. El Banco ha ayudado a los países a enfrentar estos impactos en diversas formas, entre ellas, otorgando préstamos para cubrir el déficit en los gastos públicos recurrentes para programas sociales vitales y reestructurar y condonar la deuda. Después del huracán Mitch, las instituciones financieras internacionales ayudaron a Honduras y Nicaragua a calificar para la iniciativa de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados. Al hacerlo, les ayudaron a negociar nuevos acuerdos con los acreedores y a crear el Fondo Fiduciario Centroamericano de Emergencias en colaboración con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para movilizar recursos y ayudar a cubrir el pago del servicio de la deuda.

Reconociendo la magnitud que el impacto adverso de los desastres naturales puede tener sobre los grupos vulnerables y de bajos ingresos, el BID está financiando varios programas innovadores destinados a proveer asistencia a los niños afectados por los desastres. El proyecto de cooperación técnica para apoyo de emergencia a niños y adolescentes, de 1999, facilita asistencia inmediata a niños, niñas y adolescentes afectados por el huracán Mitch en Nicaragua. Se les ofrecen servicios de salud, que incluyen vigilancia y prevención de enfermedades, vacunaciones, educación sexual y asistencia en salud mental. En respuesta a las inundaciones ocurridas en Argentina en 1998, se modificó un programa de asistencia a niños y adolescentes en riesgo, incluyendo las regiones afectadas. Por último, están preparándose iniciativas para acelerar la reconstrucción de escuelas en

Centroamérica y reducir su vulnerabilidad frente a inundaciones y huracanes.

Reconstrucción y transformación

En el pasado, el Banco ha respondido a los desastres naturales concentrándose en el período inmediatamente posterior a los eventos y orientando sus préstamos a la reconstrucción de la infraestructura y la rehabilitación de los sectores afectados. En los últimos diez años, el Banco ha prestado alrededor de US\$ 2.000 millones a la región, para ayudar a los países a salir de emergencias, principalmente para reconstruir y rehabilitar obras de infraestructura dañadas. En algunos casos, los préstamos se dirigieron a la reconstrucción de los mismos proyectos de agua potable, caminos y vivienda que el Banco había contribuido a financiar originalmente.

Recuadro 10

El programa de reconstrucción después del huracán Georges contribuye a la reducción de riesgos

El programa de reconstrucción auspiciado por el Banco, por US\$105 millones, aprobado en 1998 para la República Dominicana financió las actividades habituales de rehabilitación: una combinación de grandes proyectos de infraestructura (sistemas de abastecimiento de agua potable y reparación de torres de alto voltaje), y proyectos más pequeños destinados a reparar, rehabilitar y reconstruir la infraestructura social productiva e institucional en las comunidades de bajos ingresos afectadas por el huracán.

Al mismo tiempo, el programa protege el gasto público recurrente en los programas sociales. En este caso está cubriendo el déficit fiscal para salvaguardar programas destinados al bienestar de los niños. Además, el programa financia actividades destinadas a mejorar la capacidad del país para reducir la vulnerabilidad en el futuro, así como a responder en forma más adecuada al próximo acontecimiento de una amenaza. Estas actividades incluyen el fortalecimiento de los organismos de respuesta ante desastres naturales, un plan nacional del uso de la tierra que incluye inversiones en evaluación de riesgos, inversiones forestales, en ecoturismo y obras de control de inundaciones.

Sin duda, los préstamos para reconstrucción han sido, con mucho, los más visibles relacionados con desastres naturales. En los últimos diez años, el financiamiento del Banco se ha concentrado en la reconstrucción de la infraestructura física (sistemas de agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos han correspondido a un 65% de todos los préstamos para reconstrucción), en el restablecimiento de servicios sociales (salud, educación y vivienda; 25%) y en el otorgamiento de líneas de crédito y respaldo de actividades productivas (mayormente microempresas; 10%). En el mismo período, más de las dos terceras partes de los préstamos del BID relacionados con emergencias representaron recursos financieros frescos para los países afectados. Menos de una tercera parte de los recursos para reconstrucción provino de modificaciones de préstamos ya aprobados y que se hallaban en ejecución.

El financiamiento para actividades de reconstrucción ha variado desde obras específicas de reconstrucción hasta un enfoque más integral. El programa llevado a cabo en la República Dominicana, constituye un ejemplo reciente de un esfuerzo por evitar el resurgimiento de la vulnerabilidad mediante la adopción de un enfoque integral que aborda el riesgo futuro a través de inversiones para reconstrucción (véase el recuadro 10). Los programas integrales de reconstrucción pueden ayudar a financiar evaluaciones del riesgo, adoptar tecnologías para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención de desastres naturales. Esta última incluye la modificación de los códigos de edificación existentes o las regulaciones sobre el uso de la tierra y promoción del manejo y uso racional de los recursos naturales.

Parte 4: Mirando hacia el futuro: plan de acción

Varios de los desastres naturales ocurridos en los últimos dos años han puesto de relieve el compromiso del Banco en favor de la asistencia a los países para sobreponerse a los efectos de estos acontecimientos. En esta capacidad, el Banco ha demostrado su eficacia en la movilización de sus recursos y en la provisión de liderazgo en el respaldo de los países afectados. Al mismo tiempo, el Banco ha seguido prestando un vital apoyo al desarrollo económico y social de la región. A pesar de la promisoría evolución que se pone de relieve en la Parte I, la región continúa aquejada de una subinversión generalizada en materia de prevención y mitigación y en consecuencia sufre crecientes pérdidas ocasionadas por los desastres naturales.

El Banco está decididamente comprometido a apoyar a sus países miembros en resolver las dificultades que enfrentan debido a los desastres naturales. El liderazgo del BID es evidente en la exitosa movilización de recursos después de las catástrofes ocurridas en los dos últimos años. Al mismo tiempo, el Banco ha seguido prestando apoyo al desarrollo económico y social de la región, el cual es vital para hacerle frente a los desastres. A pesar de la promisoría evolución que pone de relieve en la Parte I, la región continúa aquejada de una subinversión generalizada en materia de prevención y mitigación, asegurándose que las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales seguirán siendo enormes. Además de proporcionar un rápido y eficiente apoyo financiero después de un evento de esta naturaleza, el Banco está comprometido a ayudar a los países a desarrollar e implementar mejores prácticas de prevención que reducirán la devastación traídas por futuras amenazas naturales. Esta parte del documento se concentra en dos aspectos: 1) la determinación de las áreas que el Banco considera estratégicas para la promoción de inversiones destinadas a reducir los riesgos en la región y 2) la formulación detallada de su Plan de Acción para incorporar esas áreas en sus propias actividades.

Áreas estratégicas de reducción de riesgos

Los principales objetivos del Banco en materia de reducción de riesgos son reducir el costo global de los desastres naturales y permitir a los países miembros manejar en forma más adecuada los riesgos que enfrentan. Para alcanzar estas metas, las operaciones crediticias y no crediticias del BID se concentrarán cada vez más en la superación de los obstáculos estructurales y en la creación de capacidad para gestionar eficazmente la reducción de riesgos. Estos obstáculos incluyen el escaso acceso a información confiable y apropiada en relación con los riesgos por parte de los responsables de adoptar las decisiones, la falta de participación del sector privado en las actividades de prevención y gestión de riesgos, el incipiente impulso político en favor de la prevención y la mitigación y la relativa escasez de capacidad técnica y operativa de las instituciones. Basándose en la experiencia de la región y de otras partes del mundo, el Banco concentrará sus esfuerzos en las seis áreas estratégicas que se discuten a continuación.

Creación de sistemas nacionales

Con unas pocas y notables excepciones, los esfuerzos de prevención y mitigación se llevan a cabo en forma *ad hoc* y la capacidad para manejar o reducir la vulnerabilidad dentro de los países es limitada. Existen comisiones nacionales de emergencia (como se las denomina genéricamente) que son órganos gubernamentales constituidos en su mayor parte por organismos de protección civil. Estas instituciones, típicamente constituidas en los años setenta en respuesta a grandes desastres naturales, han tendido a concentrar sus actividades en la preparación, respuesta y recuperación relacionadas con emergencias. Si bien la mayor parte de los países ha establecido un cierto fundamento para la gestión de emergencias (como los planes nacionales de emergencia), muchos de ellos no están respaldados por acuerdos interinstitucionales y no cuentan con recursos que les permiten operar eficazmente. Todavía no son ampliamente evidentes en la región estrategias nacionales de miti-

gación que utilicen un enfoque integral para la reducción de riesgos.

Es preciso asignar un renovado énfasis al respaldo de cada país en su transición hacia nuevas políticas, programas y mecanismos institucionales que permitan crear una capacidad técnica y operativa permanente. Ello es necesario para asegurar inversiones sostenidas en materia de mitigación de desastres naturales en el marco de sistemas interinstitucionales de gestión de riesgos. Tales sistemas incluyen instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. El Banco respalda las iniciativas que encaran los países con el fin de establecer políticas, poner en práctica mecanismos jurídicos e institucionales eficaces, recursos financieros específicos y los conocimientos técnicos y de política necesarios para la reducción de riesgos.

Desarrollo de una cultura de prevención

En muchos casos, no se presta suficiente atención a las necesidades de las víctimas potenciales de desastres naturales y al estímulo de una demanda efectiva de mitigación. Las familias necesitan proteger sus viviendas y sus vecindarios, las comunidades necesitan proteger sus escuelas, mantener en funcionamiento las instalaciones de salud y designar refugios. Las empresas necesitan salvaguardar sus activos frente a la interrupción de las actividades y los gobiernos locales poner en práctica códigos de construcción y decisiones sobre el uso de la tierra. La atención a la demanda de seguridad puede ayudar a asignar más eficientemente los recursos para la prevención, hacer que los gobiernos y otros organismos se responsabilicen por la gestión de los riesgos, y vigilar el progreso y los resultados de sus políticas y acciones.

Para ello pueden aplicarse varios enfoques. Las comunidades locales y gobiernos municipales, ministerios sectoriales o el sector privado deberán comprender los riesgos que enfrentan los medios para salvaguardarse a sí mismos y a sus activos. Para proporcionar esa capacidad, resulta esencial compartir información fácilmente accesible acerca de las amenazas naturales que enfrenta la comunidad. Ello incluye demostrar los resultados positivos de las medidas de mitigación y proporcionar. El análisis de lo que las torna vulnerables, así como su posición en relación con otras comunidades,

puede contribuir a convertir a la prevención en una prioridad. Los incentivos económicos también constituyen valiosas herramientas que pueden poner de relieve la importancia de la prevención y a la vez estimular la inversión en aspectos preventivos que pueden ser nuevos para las municipalidades y otros interesados. Tales incentivos pueden incluir subsidios para vivienda de bajos ingresos en áreas no vulnerables, esquemas de seguros y financiamiento para estudios de factibilidad de proyectos de inversión.

Reducción de la vulnerabilidad de los pobres

Cuando ocurren desastres naturales, los grupos de bajos ingresos son los que normalmente enfrentan la mayor posibilidad de morir o de sufrir daños considerables en sus viviendas o en sus activos productivos, debido a que generalmente viven en áreas propensas al peligro y en unidades habitacionales de carácter precario. A menudo están mal preparados para enfrentar las conmociones que los afectan. Debido al tipo y nivel de sus ingresos, así como al carácter informal de sus viviendas, los pobres no tienen capacidad para reducir el riesgo a través de la compra de seguros privados. Las unidades familiares pobres, afectadas por los desastres naturales, son las que tienen menor posibilidad de recuperarse física o financieramente. Los programas de mitigación por lo general no toman en cuenta las necesidades de las comunidades pobres, o de lo contrario financian medidas sin haber consultado con las comunidades sobre los riesgos y las propuestas para encontrar soluciones adecuadas. En lugar de recibir la atención que éstos merecen, los vecindarios pobres y marginales son raramente el centro de los incentivos para la realización de inversiones para reducir riesgos. A menos que se lleven a cabo acciones específicas, la tasa de pobreza aumentará sustancialmente después de un desastre natural, así como la vulnerabilidad de la zona ante futuros acontecimientos.

Tomando como base la experiencia del Banco en la lucha contra la pobreza, los futuros proyectos tanto en el ámbito de la gestión de desastres naturales como en la reducción de la pobreza, deben responder mejor a los riesgos y a los desafíos que enfrentan las unidades familiares y los vecindarios pobres. Deben realizarse esfuerzos coordinados para compartir la experiencia y efectuar inversio-